



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., dieciséis (17) días de septiembre de dos mil diecinueve (2019)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2019-00375-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ALFONSO MEYER CORDOBA MORA
DEMANDADO: NACIÓN - CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL-CASUR

En el presente asunto, **ALFONSO MEYER CORDOBA MORA**, promueve demanda en contra de la **NACIÓN - CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR**, con el objeto de obtener la nulidad del acto administrativo, Oficio No. 3736 GAG/SDP del 12 de noviembre de 2013, a través del cual se le informó el reconocimiento de la asignación de retiro a su favor y la fecha a partir de la cual fue reconocida tal prestación. Así mismo, a título de restablecimiento del derecho, solicita el reajuste de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones y subsidio de alimentación, como parte integral de la asignación de retiro, conforme al principio de oscilación previsto en los Decretos 1091 de 1995 y 4433 del 2004.

Pues bien, analizado el escrito introductorio, se observa que no es posible en este momento dar trámite a la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

El Capítulo III de la Ley 1437 de 2011, consagra los requisitos que deben reunir las demandas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. *La designación de las partes y sus representantes.*
2. ***Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.***
3. *Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.
7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”

Así mismo, el artículo 166 ibídem, señaló que la demanda debe venir acompañada, entre otros, de la copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, de los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, y las copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público.

Visto esto y al realizar una revisión de tales requisitos, se pudo establecer que la demanda y los anexos, no cumplen con la totalidad de los mismos, como se indica a continuación:

1. De los actos administrativos demandados.

En cuanto a los actos administrativos que se pueden demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se debe tener en cuenta en primer lugar, que la Ley 1437 de 2011, en su artículo 43, señala que **“Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.”**

Para explicar lo anterior, debe tenerse en cuenta como primera medida, que existen varias clases de actos administrativos que puede proferir la administración, a saber, los actos de trámite o preparatorios, los definitivos y los de ejecución, sin embargo, no todos son susceptibles de ser demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para estudiar su legalidad, pues para ello deben contar con una condición *“sine qua non”*, y es que **creen, modifiquen o extingan una situación jurídica.**

En otras palabras, si los actos administrativos no son definitivos, es decir, si no contienen la manifestación de la voluntad de la administración con la cual se culmine con el procedimiento administrativo ante la entidad respectiva, tal como lo define el artículo 43 del C.P.A.C.A., no pueden demandarse bajo los medios de control que consagra la Ley 1437 de 2011.

Al respecto, el Consejo de Estado – Sección Segunda, en proveído adiado 25 de mayo de 2017, dentro del expediente 2012-00400, C.P. Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER, hizo alusión a esta diferenciación entre las clases de actos administrativos, indicando lo siguiente:

“Se ha entendido el acto administrativo como la manifestación de voluntad de la administración, en ejercicio de la función administrativa, orientada a producir efectos jurídicos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica, y, por ende, susceptible del control jurisdiccional. También puede ser impugnado en sede administrativa a través de los recursos de la vía gubernativa o por revocación directa. Sobre este último aspecto, los artículos 49 y 50 del Código Contencioso Administrativo (CCA) establecen que «No habrá recursos contra los actos de carácter general, ni contra los **de trámite, preparatorios, o de ejecución** excepto en los casos previstos en norma expresa» y «Por regla general, contra los actos **que pongan fin a las actuaciones administrativas** procederán los siguientes recursos: [...] Son **actos definitivos**, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla» (negrillas no son de los textos).

En este sentido, ha de comprenderse que el **acto de trámite** es aquel que no le pone fin a una actuación administrativa o asunto, sino que tiende a impulsarla hasta su culminación, mientras que el **definitivo** la resuelve de fondo y la termina. Al respecto, esta Corporación¹ ha sostenido:

[...]

La referida norma [art. 50 CCA] hace una distinción entre actos administrativos definitivos y los actos de trámite. Los primeros son aquellos que concluyen la actuación administrativa, en tanto que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto y producen efectos jurídicos definitivos, mientras que los de trámite contienen decisiones administrativas necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa, salvo que, como lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el cual se convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al proceso administrativo.

La calificación de un acto administrativo como acto definitivo o de trámite es fundamental para determinar si es susceptible de recursos por la vía gubernativa y asimismo de control jurisdiccional contencioso administrativo, conforme a los artículos 49, 50 y 84 del Código Contencioso Administrativo. [...]”

Así pues, conforme a lo señalado por el H. Consejo de Estado, es claro que los actos de trámite o preparatorios, que simplemente buscan impulsar la actuación administrativa para que llegue hasta su culminación, no pueden ser demandados, en este caso, bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto no contienen en sí mismos una decisión definitiva frente al pedimento elevado por el interesado, lo cual impide que se realice un estudio de legalidad, pues no deciden el fondo del asunto y no producen efectos jurídicos definitivos, que como

¹ Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección quinta, sentencia de 22 de octubre de 2009, radicación número: 11001-03-28-000-2008-00026-00; 11001-03-28-000-2008- 00027-00, consejero ponente: Filemón Jiménez Ochoa, actor: Camilo Araque Blanco y otros.

se dijo, es el requisito sine qua non para que se ejerzan las acciones legales respectivas, o los recursos en vía gubernativa que consagra el C.P.A.C.A.

Aun cuando la providencia traída a colación hace alusión al Decreto 01 de 1984, lo cierto es que la ley 1437 de 2011, también estableció en su artículo 75, que no habrá lugar a presentar recursos contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución, excepto los casos previstos en norma expresa.

Ahora bien, descendiendo al caso sub lite, encuentra el Despacho, que el acto administrativo demandando, Oficio No. **No.3736-GAG-SDP del 12 de noviembre de 2013**, se dispuso:

“ En atención al escrito del asunto, le informo, que revisado el expediente administrativo del señor SC ® CORDOBA MORA ALFONSO MEYER, se constató que en virtud de lo certificado en la hoja de servicios, expedida por la Policía Nacional, esta entidad le reconoció asignación mensual de retiro, a partir del 13-05-2013, tomando para la liquidación de la prestación el sueldo y partidas computables establecidas en los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004, normas de carácter especial mediante las cuales se expide el régimen de asignación y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la policía nacional:

(...)

En concordancia con el parágrafo único del artículo 49 del decreto 1091 de 1995.

Por tratarse de una información, contra este oficio no procede recurso alguno.”

Pues bien, una vez analizado el precitado acto administrativo demandado, encuentra el Despacho, que este **obedece a un acto administrativo de trámite, toda vez que no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas**, por el contrario, simplemente se pone en conocimiento del peticionario: **1) el reconocimiento de la asignación de retiro a su favor; 2) la fecha a partir de la cual se reconoció la asignación de retiro; 3) el marco normativo a través del cual se realizó la liquidación de la asignación de retiro reconocida.**

De lo anterior, colige este Despacho, que el acto administrativo, Oficio No. No.3736-GAG-SDP del 12 de noviembre de 2013, no contiene una decisión definitiva que permita a este realizar el control de legalidad sobre lo pretendido, pues no niega, reconoce y/o modifica el reajuste a la prestación periódica solicitada.

Reitera el Despacho, que los actos administrativos de trámite, como el del presente asunto, contiene decisiones administrativas necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa. Por tanto, no podría considerarse un acto administrativo de trámite, como un acto susceptible de control jurisdiccional, todas vez que, como se estableció anteriormente, estos actos, a diferencia de los definitivos, no expresan en concreto la voluntad de la

administración, sino que constituyen el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasmará en el acto definitivo.

Corolario de lo anterior, es del caso advertir a la parte actora, **que este Despacho rechazará la demanda**, en razón a que el acto administrativo demandado, Oficio No.3736-GAG-SDP del 12 de noviembre de 2013, de conformidad con lo expresado anteriormente, obedece a un acto administrativo de trámite, **y por ende, no es susceptible de control judicial, puesto que no decide directa o indirectamente el fondo del asunto o hace imposible continuar la actuación**. Así las cosas, para este tipo de escenarios el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone en su numeral 3°, **que se rechazará la demanda respecto de cierto tipo de actos administrativos “Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.”**

En virtud de lo anterior, el Despacho,

RESUELVE


PRIMERO.- RECHAZAR LA DEMANDA, interpuesto por **ALFONSO MEYER CÓRDOBA MORA** en contra de **NACIÓN – CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente auto.

SEGUNDO.- Ejecutoriada la presente providencia, previa las actuaciones a que haya lugar, devuélvase a la parte demandante los anexos sin necesidad de desglose, y a través de Oficina de Apoyo procédase al archivo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

AVCA

 <p>JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA</p>
--

